

CRONICA DEL MES

Mayo-junio

Contrariamente a lo que hubiera sido de esperarse tomando en cuenta las condiciones objetivas prevalecientes en el país, la conmemoración organizada por los sectores cercanos a la UNTS con ocasión del día de los trabajadores, contó con una concurrencia bastante modesta. El 1 de mayo, la UNTS organizó cuatro concentraciones en igual número de ciudades del país: San Salvador, San Miguel, Santa Ana y Usulután, en las cuales participaron 10 mil, 3 mil, 800 y 5 mil personas, respectivamente, según las cifras ofrecidas por la propia UNTS. Aunque la conmemoración estuvo precedida de diversas advertencias intimidatorias del gobierno y de la Fuerza Armada que atribuían la preparación de las movilizaciones a un "plan de violencia" diseñado por el FMLN, el propio día de las manifestaciones el gobierno adoptó la medida hábil de acuartelar a los cuerpos de seguridad y a los efectivos del ejército para evitar previsibles provocaciones de los manifestantes.

No obstante la exigua presencia de manifestantes en las calles de San Salvador el 1 de mayo, el movimiento popular empezó pronto a dar muestras de una creciente beligerancia reivindicativa que se prolongó a todo lo largo del mes. El 6, la Asociación de Expendedores de Billetes (ASEBIL) y la Asociación Cooperativa de Vendedores de Billetes (COVEBIL) iniciaron un paro de labores para demandar que la junta directiva de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) gestionara ante la asamblea legislativa la aprobación de su plataforma reivindicativa, según se había comprometido a hacerlo después del paro de labores del 25 de septiembre de 1986. El mismo día, ANDES hizo un paro de labores y una concentración frente al Ministerio de Trabajo para solicitar audiencia al titular del ramo y entregar su plataforma reivindicativa; mientras tanto unos 400 trabajadores de la Escuela Nacional de Agricultura, afiliados a la Asociación Nacional de Trabajadores del Ministerio de Agricultura y Ganade-

ría (ANTMAG), dieron inicio a un paro indefinido de labores en demanda del cumplimiento del contrato colectivo. El 9, el Sindicato de Trabajadores Agropecuarios Salvadoreños (SITAS) realizó una concentración frente al Ministerio de Trabajo para demandar la aprobación de su personería jurídica y otras reivindicaciones laborales. Dos días más tarde, la Confederación de Asociaciones Cooperativas (COACES) marchó demandando mejores condiciones crediticias y de comercialización para sus productos. Asimismo, COACES denunció durante el evento que desde enero de 1986 a dicha fecha, el gobierno y los grupos paramilitares habían capturado a por lo menos un centenar de cooperativistas. En el mismo ámbito de reivindicaciones del sector agrícola, también la Unión Nacional Campesina (UNC), la Asociación Nacional Campesina (ANC) y la Unión Nacional Obrero Campesina (UNOC) reiteraron sus exigencias de concesión inmediata de créditos de parte del Banco de Fomento Agropecuario.

Entrada la segunda quincena de mayo, el 19, la Policía Nacional intervino en los locales de la Lotería Nacional en Santa Ana y San Salvador. El mismo día, la Asociación de Trabajadores de la CEL (ATCEL) marchó para exigir la personería jurídica y el cumplimiento de la plataforma reivindicativa presentada desde 1985, así como para protestar por las medidas implementadas para paliar la crisis energética (cortes de energía, cambio de hora, alza de las tarifas del servicio). El 21, la Asociación de Trabajadores de Telecomunicaciones (ASTTEL) realizó un paro de labores y una marcha para exigir un incremento salarial de 300 colones y otras prestaciones. El 22, ANDES organizó un nuevo paro de labores en demanda también de un aumento salarial de 300 colones, así como de la suspensión de traslados arbitrarios y del cese del racionamiento de la energía eléctrica. El mismo día, el Sindicato de la Industria del Café (SICAFE) inició en 18 benefi-

cios del país un paro indefinido de labores para exigir la libertad de 3 de sus afiliados capturados el 1 de mayo en Santa Ana por efectivos de la Segunda Brigada de Infantería.

La exigencia de la dimisión de Duarte siguió siendo una consigna fundamental de las movilizaciones organizadas por la UNTS y por los sectores afines a ésta. El 19, la Coordinadora de Solidaridad de los Trabajadores (CST) hizo una nueva marcha orientada según dicho objetivo. El 23, unas 700 personas participaron en la "Cuarta Asamblea Nacional de Delegados de la UNTS," denominada "Con la organización, unidad y lucha, los trabajadores y el pueblo avanzamos al triunfo." Al presentar la asamblea, el profesor Julio César Portillo indicó que "nos hemos unidos para que Duarte se vaya, que nos deje libres y gobernarnos responsablemente." Algunas de las recomendaciones formuladas en las diversas mesas de trabajo sugerían que la UNTS iniciara paros progresivos hasta llegar a una huelga general para conseguir la dimisión del mandatario. Por otro lado, durante el evento se incorporaron a la UNTS el Comité Cristiano Pro-Desplazados (CRIPDES), la Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria de Oriente (FECORAO) y la "Unidad Universitaria," integrada por AGEUS, FEUS, ADUES y CCTU. Cinco días más tarde, el CRIPDES se tomó la catedral y la iglesia de El Calvario, demandando la mediación del arzobispo para el retorno de los desplazados a sus lugares de origen, la suspensión de algunos operativos militares en oriente, el cese de los bombardeos de la Fuerza Armada, el cese del reclutamiento forzoso y una amnistía general para los presos políticos.

Las presiones ejercidas por ANDES lograron el 25 una audiencia con el Ministro de Educación, si bien éste aceptó solamente discutir uno de los siete puntos de la plataforma presentada, el de la creación de más plazas magisteriales. Mientras tanto, la huelga de ANTMAG no sólo se mantuvo sino que, a los mil trabajadores y técnicos en paro en los departamentos de La Paz, Cabañas y San Vicente, se sumaron a partir del 26 otros 4 mil trabajadores de la Región IV (departamentos de San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután). En contraste, el 29 COVEBIL y ASEBIL levantaron su paro de labores, luego que la "Comisión del trabajo y previsión social" de la asamblea legislativa se comprometiera a resolver 3 de las 6 reivindicaciones planteadas.

Aunque el grueso de la conflictividad laboral se dio en el sector público, diversos sindicatos del sector privado llevaron a cabo también una relevante lucha reivindicativa. Así, el 11, el sindicato de la empresa "Etiquetas y Elásticos" se tomó las instalaciones de la fábrica; mientras que el Sindicato de la Industria Turística Gastronómica (STITGASC) denunció el despido de 11 trabajadores de la Avícola

San Benito "por ser parte de la directiva de la seccional sindical" en formación. Días más tarde, el 27 de mayo, la CST anunció paros parciales en la fábrica "Maidenform," "Hilandería de El Salvador" e Ingenio El Angel. El 28, los trabajadores de la fábrica de "Aceites y Grasas El Dorado" iniciaron un paro indefinido de labores en protesta por el despido masivo de 50 compañeros, que la patronal justificó aduciendo carestía de materia prima.

El mes de mayo finalizó sin que la efervescencia laboral ofreciera signos de disminuir. Por el contrario, el 29, el Sindicato del INPEP (SITINPEP) marchó para exigir la aprobación de su personería jurídica. En otras marchas realizadas el mismo día, el Comité de Despedidos y Desempleados (CODYDES), el Consejo Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM), la UNC y COVEBIL reiteraron su exigencia de que el presidente Duarte renunciara y demandaron otras reivindicaciones específicas. El último día de mayo, la UNTS realizó una concentración frente al centro penal de Mariona para exigir una amnistía general para los reos políticos. Durante la acción resultó herido de bala, en circunstancias confusas, el profesor Julio César Portillo, quien fue recogido por sus compañeros y atendido médicamente en condiciones de absoluto hermetismo. Según las versiones de la UNTS y de los comités de madres y familiares de los presos políticos, Portillo habría sido herido por disparos efectuados desde el interior del penal en el curso de un "ametrallamiento" contra los manifestantes. Según la versión gubernamental, habría sido herido por sus propios compañeros con el propósito de polarizar la situación.

La crisis socio-económica agudizada por la guerra, raíz última de toda esta conflictividad, prosiguió su deterioro. El signo más relevante de ello lo fue, una vez más, como en las semanas precedentes, el plan de racionamiento de la energía eléctrica, implementado a partir del 16 de marzo. A solicitud del PCN, el presidente de la CEL, general Jaime Abdul Gutiérrez, compareció el 14 de mayo ante la asamblea legislativa, para explicar las medidas adoptadas. Durante la interpelación, el general Gutiérrez indicó que el poner a funcionar las plantas de diesel para reducir el racionamiento implicaría a la CEL un costo adicional de un millón de colones diarios en concepto de combustible y reiteró que el aumento en las tarifas del servicio era impostergable. En el mismo marco de problemática económica, el presidente saliente del Banco Central de Reserva (BCR), Lic. Alberto Benítez Bonilla, subrayó que mientras prosiguiera la guerra era impensable la reactivación, al tiempo que informó que el principal obstáculo a cualquier programa de estabilización lo constituía el enorme déficit fiscal, proyectado en 700 millones de colones, de los cuales 400 millo-

nes constituían una brecha sin financiamiento. Por su lado, el Ministro de Hacienda informó que la guerra estaba consumiendo diariamente 3 millones del presupuesto ordinario del Estado.

La intensidad de la guerra, empero, no decayó. En el marco de la nueva etapa estratégica abierta por el ataque a El Paraíso, el FMLN conmemoró el día de los trabajadores, en la madrugada del 2 de mayo, con un ataque simultáneo a diversas posiciones del ejército en el interior y periferia de San Francisco Gotera, cabecera departamental de Morazán. El ataque, denominado "Operación saludo a la valiente clase trabajadora," se concentró contra las instalaciones del Destacamento Militar Nº 4 y de la Policía Nacional. Según Radio Venceremos, la operación habría sido efectuada por 3 batallones del FMLN y una unidad de armas de apoyo de artillería, los cuales atacaron simultáneamente la pista militar de Chilanga, las defensas periféricas del cantón Los Mata y del cerro Mendoza, el helipuerto de Gotera y la base de una batería de morteros de 120 mm, las instalaciones del destacamento militar, la segunda guarnición más importante en la zona oriental y el cuartel de la Policía Nacional, sede del batallón Cacahuatique.

Según la versión ofrecida por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Adolfo Blandón, el ataque habría sido perpetrado por unos 150 a 200 guerrilleros, armados con morteros de 81 y 90 mm, lanzagranadas y fusilería. El comandante departamental y jefe del destacamento, coronel Mauricio Vargas, interpretó la acción como un ataque contra la población civil, que dejó como saldo una señora muerta, 14 heridos y una decena de casas dañadas. Vargas admitió en las filas castrenses 10 muertos y 14 heridos, al tiempo que informó que el ejército había ocasionado al FMLN 7 muertos y "un número no determinado de heridos." Por su lado, el FMLN informó que sus fuerzas habían causado al ejército un total de 78 bajas, 36 de ellas mortales, y que, como resultado del "certero impacto" de 40 disparos de artillería, fueron destruidas las bases en la pista militar en cerro Mendoza y en el helipuerto, y se ocasionó severos daños al destacamento militar y al cuartel de la Policía Nacional. Asimismo, el FMLN habría destruido 3 camiones militares, una tanqueta y 3 piezas de artillería de 120 mm, e incautado 9 fusiles M-16, 2 lanzagranadas M-79 con 36 granadas, una ametralladora M-60, un cañón de 90 mm, un lanzacohetes M-72 y diverso material bélico.

Tres días después del ataque a Gotera, otras unidades guerrilleras atacaron diversas posiciones del ejército en los frentes central y paracentral. En el marco de ellas, el FMLN atacó a la defensa civil de Villa Victoria (Cabañas), a cuyos efectivos habría causado, según Radio Venceremos, 7 muertos, 3

heridos y 3 prisioneros, además de destruir la comandancia local y dañar severamente los locales de la alcaldía y de ANTEL. Otras posiciones atacadas estaban localizadas en la carretera entre Suchitoto y Aguilares y en la hacienda Santa Rita; según Radio Venceremos, el saldo acá fue de 50 bajas castrenses. También fue atacada la base militar del cerro Teconal (San Vicente), ubicada a un kilómetro de la Quinta Brigada de Infantería, con saldo de 7 soldados muertos y 8 heridos, y un combatiente guerrillero muerto. En todos los casos, el FMLN movilizó unidades combinadas de artillería, comandos y fusilería.

La intensidad del accionar guerrillero, enmarcado sobre el trasfondo de los ataques a El Paraíso y a Gotera, suscitó especial inquietud en la Fuerza Armada. El propio Ministro de Defensa, general Carlos Vides Casanova, manifestó el 6 de mayo que las últimas acciones efectuadas por el FMLN "nos obligan a hacer una revisión permanente de todos nuestros planes de defensa y a mejorar los sistemas de reacción que debemos emplear... estamos revisando esto y detectando cuáles han sido nuestras fallas militares." Aparentemente, la preocupación por la situación militar trascendió también al Pentágono. El 7, visitó repentinamente el país una misión de alto nivel integrada por el subsecretario de defensa, Fred Ikle; el secretario de asuntos centroamericanos del Departamento de Estado, Bill Walker; el encargado de asuntos centroamericanos de AID, Dwight Ike; y el asesor del Consejo de Seguridad Nacional, José Solorzano. Significativamente, a diferencia de otras oportunidades, los visitantes se reunieron no sólo con Duarte y el alto mando, sino también con sectores de la oposición de derecha.

Con todo, tras las acciones de la primera semana de mayo, la operatividad insurgente comenzó a experimentar un relativo descenso, mientras que, por su lado, la Fuerza Armada mantuvo sus operativos cotidianos de patrullaje en diversos puntos del país y prosiguió el desarrollo del operativo "Teniente Fernando Martínez Lemus" en el norte de Morazán, con resultados más bien modestos, descontando algunas acciones como el desmantelamiento de la escuela de adiestramiento guerrillero "Comandante Ana Mercedes Letona," localizada en los alrededores de Jocoaitique. El 13, Radio Venceremos aseguró que, durante la segunda fase del operativo, el FMLN había causado al ejército 57 bajas, entre muertos y heridos, entre ellas 5 oficiales; y, durante los 40 días que llevaba el operativo, había ocasionado 210 bajas en las filas castrenses.

En el marco de diversas acciones medianas, el 17 el FMLN emboscó un camión militar en las inmediaciones del caserío El Túnel (Chalatenango),

con un saldo de 35 bajas castrenses, según Radio Venceremos. El 20, el FMLN atacó la posición militar de San Juan Tepezontes (La Paz). Como saldo de la acción, según el COPREFA, habría resultado muerto el comandante local y 3 efectivos de la defensa civil; también habría muerto un niño y fue destruido el local de la alcaldía. El mismo día, tropas del Destacamento Militar Nº 4 fueron emboscadas cuando se dirigían a reforzar el puesto de la Policía Nacional sobre el puente Río Seco, que estaba siendo atacado por unidades guerrilleras. En la acción resultó muerto un capitán del batallón Cacahuatique y heridos un sargento, dos subsergentes y el asistente del capitán. Hubo otros enfrentamientos en Suchitoto y San José Guayabal (Cuscatlán), Villa El Triunfo (Usulután) y La Tortuga (Cabañas). En todas estas acciones, según Radio Venceremos, el FMLN habría causado a la Fuerza Armada no menos de 50 bajas. Por otro lado, en el marco de las acciones de sabotaje, el FMLN incendió, el 20, un bus en Apopa (San Salvador) y, al día siguiente, destruyó en Nejapa una máquina de FENADESAL cuando se dirigía a San Salvador transportando 10 vagones de mercadería. A partir del 31, el FMLN decretó un nuevo paro al transporte —el quinto en el año. El mismo día, unidades guerrilleras atacaron el puesto de la defensa civil en Apastepeque (San Vicente), donde destruyeron parcialmente las instalaciones de ANTEL, el juzgado de paz y la alcaldía.

En medio del fragor de la guerra, renacieron algunas perspectivas de diálogo. El 4 de mayo, el presidente de la asamblea legislativa, Dr. Guillermo Guevara Lacayo, informó a la prensa que, con ocasión de su estadía en Managua, a fines de abril, para asistir a la 77ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, tanto él como el Ministro de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, se habían reunido con los dirigentes del FDR, Rubén Zamora y Jorge Villacorta, para examinar las posibilidades de una solución política al conflicto. La versión fue confirmada al día siguiente por Rubén Zamora, quien reiteró que las posibilidades de que el ejército, aun con toda la ayuda norteamericana, pudiera ganarle al FMLN eran virtualmente nulas "y por lo tanto para que nuestro país no se siga desangrando y sufriendo, debemos buscar una solución entre salvadoreños a través del diálogo y la negociación."

Más formalmente, con ocasión de su presencia en Bogotá para asistir a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL), el presidente del FDR, Dr. Guillermo Ungo, anunció, el 26 de mayo, una nueva propuesta de diálogo del FDR-FMLN, dirigida al presidente Duarte y al Alto Mando de la Fuerza Armada, con el propósito de implementar una "Negociación inmediata encaminada a la solución del conflicto."

Ungo añadió que la propuesta sería entregada ese mismo día al intermediario del diálogo, monseñor Arturo Rivera Damas, para que la hiciese llegar al gobierno salvadoreño.

Al día siguiente, en una primera reacción al anuncio, el presidente Duarte manifestó no haber recibido propuesta alguna, al tiempo que sugirió a Ungo que, antes de andar formulando ofertas de diálogo, debería buscar al aval del FMLN, pues "el FDR no tiene decisión propia; son prisioneros de los comandantes, que han optado por la violencia y la guerra."

El 28 de mayo, a través de Radio Venceremos, el comandante Joaquín Villalobos dio lectura a la propuesta. El documento, suscrito por Rubén Zamora, a nombre del consejo ejecutivo del FDR, y por el comandante Shafick Handal, por la comandancia general del FMLN, constaba de dos grandes pasos: un "acuerdo trascendental para la humanización y la reducción del impacto económico, social y político de la guerra" y "un planteamiento para reabrir el diálogo hacia la solución política global." El acuerdo para la humanización del conflicto contenía 18 medidas, entre las cuales destacaban, por el valor estratégico que revestían para el FMLN, el ofrecimiento guerrillero de suspender el sabotaje económico (paros de transporte, cortes de energía, sabotaje a cultivos de exportación, beneficios, etc.) y la suspensión del uso de minas de piteo y trampas "cazabobos," a cambio de que la Fuerza Armada se comprometiera también a no poner minas y a suspender también la guerra aérea y el uso de armas de artillería de largo alcance, debido al dañino impacto de estos recursos sobre la población civil. Otro ofrecimiento significativo lo constituía el compromiso de "no interferir con medidas militares en el ejercicio de las funciones civiles, propias de los alcaldes, jueces de paz y demás funcionarios del aparato político del Estado."

En relación a la mecánica para operativizar la discusión de los 18 puntos, el FMLN-FDR proponía iniciar la negociación el 15 de julio, previa realización de una reunión preparatoria entre monseñor Rivera y delegados de los revolucionarios, a realizarse en la segunda mitad de junio en Chalatenango o Morazán. Los frentes subrayaban la necesidad de que en la discusión participaran delegados plenipotenciarios del alto mando castrense, de modo que cualquier compromiso que el gobierno de Duarte contrajera no fuera posteriormente vetado por la Fuerza Armada.

Sobre la base del acuerdo para la humanización, el segundo paso de la propuesta consistía en la reapertura formal del proceso de diálogo directo entre el gobierno-Fuerza Armada y el FMLN-FDR, en el marco de un amplio debate nacional entre to-

das las fuerzas sociales y políticas interesadas en "retomar en nuestras propias manos el destino de la patria" e imponer una solución nacional al injerencismo del gobierno norteamericano, "quien se obstina en continuar el escalamiento de la guerra en El Salvador y rechaza una negociación justa y realista al conflicto." Como era previsible, la propuesta recibió una destemplada negativa del presidente Duarte, quien, el 28 de mayo, cuando ya el documento le había llegado, subrayó que "obviamente, no puedo aceptar un plan así" y reiteró por enésima vez que no dialogaría hasta que la guerrilla depusiera las armas y se comprometiera a incorporarse al "proceso democrático." En la misma línea del mandatario, también el alto mando castrense desatendió las exhortaciones de Rubén Zamora a reconsiderar la propuesta, por más que éste recordó al general Blandón que, según sus propias afirmaciones, el 43 por ciento de las bajas del ejército se debía a las minas, de modo que "beneficiaría a los soldados el planteamiento de suspensión de su uso."

En contrapartida a su desinterés por reanudar el diálogo, por otro lado, el presidente Duarte envió a la asamblea legislativa, a través del Ministerio de Justicia, un proyecto de amnistía que, según el mandatario, favorecería a unos 300 ó 400 reos políticos y entre 600 y 700 comunes. El proyecto, recibido por la asamblea el 7 de mayo, contemplaba la amnistía para los reos civiles que se encontrasen detenidos cumpliendo penas de prisión por haber participado como "autores inmediatos, mediatos o cómplices de delitos políticos o comunes conexos con políticos," a excepción de los actos de terrorismo o tentatorios de terrorismo comprendidos en los artículos 400 y 401 del código penal. Junto a la amnistía, como otro de los pasos en la humanización del conflicto, el 14 de mayo Duarte anunció que atendería la petición del FMLN para la evacuación al exterior de unos 100 guerrilleros lisiados. En relación al mismo punto, el obispo auxiliar de San Salvador, monseñor Gregorio Rosa Chávez, indicó el 24 de mayo que el arzobispado estaba mediando desde hacía varias semanas para la evacuación de los lisiados, así como para la liberación de los alcaldes de San Cayetano Istepeque y de Mercedes La Reina, secuestrados por el FMLN. El viceministro de seguridad pública, coronel Reynaldo López Nuila, manifestó que la amnistía y la evacuación de los lisiados se inscribían en el propósito gubernamental de "ir abriendo caminos de entendimiento y espacios políticos" que favorecerían la democratización del proceso. En contraste, la derecha (ARENA, sobre todo) estimó que Duarte se había "sacado de la manga" dichas medidas, las cuáles únicamente servirían para desincentivar a la Fuerza Armada en su lucha contra la "subversión."

A despecho de estas críticas, sin embargo, y de su malestar visceral ante la gestión democristiana,

la derecha política representada en la asamblea (ARENA, PAISA y el diputado independiente, René Fortín Magaña) levantó el 13 de mayo la huelga parlamentaria iniciada el 6 de enero conjuntamente con el PCN, pero que este partido, con mayor lucidez y pragmatismo políticos que las restantes fracciones opositoras, levantara a partir del 10 de abril. El presidente de ARENA, Alfredo Cristiani, intentó justificar la decisión de suspender la huelga aduciendo que "todavía existen signos para creer en la democracia y en el respeto del orden constitucional," para ilustrar lo cual aludió a la admisión, por parte de la Corte Suprema de Justicia, del recurso de amparo interpuesto por el gerente administrativo del Consejo Central de Elecciones (CCE) por la destitución de que había sido objeto de parte del presidente del CCE, Mario Samayoa (PDC). En el fondo, sin embargo, como el propio Cristiani admitió de modo más velado, la suspensión de la huelga se habría debido a la pérdida de la capacidad de presión sobre el PDC tras la reincorporación del PCN a la actividad legislativa.

El retorno de la posición al trabajo de la asamblea, empero, no significó en modo alguno un rebajamiento de las tensiones entre la derecha y el gobierno, como lo puso de relieve la confrontación entre el Ministerio de Economía y la industria farmacéutica, tras la emisión, el 16 de mayo, del Acuerdo 211, el cual establecía precios máximos de venta para los medicamentos nacionales e importados y sanciones de hasta 25 mil colones a los importadores, productores o comercializadores de medicinas que alterasen los precios fijados por el ministerio. Como en anteriores conatos gubernamentales para regular las utilidades leoninas de la empresa privada, el Acuerdo 211 suscitó un rabioso rechazo del gremio farmacéutico, apoyado por las principales asociaciones empresariales (ANEP, ASI, Cámara de Comercio e Industria). En asamblea extraordinaria de socios, realizada el 23 de mayo, la Cámara Salvadoreña de la Empresa Farmacéutica (CASEFAR) exigió la derogatoria inmediata del acuerdo, advirtiendo que, de no ser derogado, se crearía un desabastecimiento de medicinas y un aumento del desempleo por la quiebra de innumerables farmacias, laboratorios y droguerías, ya que "nadie puede obligar a los empresarios a continuar en una actividad irrentable."

En el ámbito de la política exterior salvadoreña, el país siguió sacudido, aunque con menos intensidad que en las semanas precedentes, por el vendaval de las revelaciones del escándalo Irán-Contras. En las audiencias sostenidas ante el congreso norteamericano, a partir del 5 de mayo, el general retirado Richard Secord involucró a los generales Adolfo Blandón y Juan Rafael Bustillo en las operaciones ilegales de abastecimiento a "los contras." No se conoció ningún desmentido público del general Bus-

tillo respecto a las acusaciones de Secord, no así del general Blandón, quien manifestó que "ese señor está diciendo mentiras en ese senado, en ese congreso; yo no sé dónde están, dónde habrán montado ese circo. Indudablemente ese señor persigue algún objetivo y —esto es una especulación rápida— pienso que alguna conexión tienen, algún vaso comunicante hay entre la subversión y estos señores que están tratando de involucrarnos para impedir la ayuda a El Salvador."

La fidelidad salvadoreña a la estrategia intervencionista norteamericana en Centroamérica no recibió un pago muy generoso de la Casa Blanca, al menos en términos de la solicitud que el 10 de abril formulara Duarte a Reagan para que los 400 a 600 mil salvadoreños ilegales afectados por la ley Simpson-Rodino fuesen "privilegiados con la extensión de una salida voluntaria hasta que la situación económica haya mejorado" en El Salvador. El 14 de mayo, el embajador Edwin Corr entregó al gobierno salvadoreño una carta rechazando la solicitud, aduciendo que el gobierno de Reagan la había estudiado "muy seriamente" pero "decidió evitar excepciones que otros pudieran interpretar como un precedente," según lo formuló la vocero del Departamento de Estado. No obstante, indicó que el secretario de Estado, George Shultz, consultaría con el Ministro de Justicia, Edwin Meese, y con el Servicio de Inmigración, otras alternativas de solución a la situación de los salvadoreños ilegales.

Mientras tanto el gobierno de Reagan siguió más preocupado por desplegar su escalada belicista en la región que por implementar medidas que solucionaran las raíces estructurales del conflicto centroamericano. El 13 de mayo quedó constituida en Miami la "Resistencia Nicaragüense," cuyo directorio quedó integrado por Alfredo César, del Bloque Opositor del Sur; Adolfo Calero, de la tendencia conservadora; Aristides Sánchez, de la liberal; Azucena Ferrey, por la Democracia Cristiana; Alfonso Robelo, por la socialdemocracia; y Pedro Joaquín Chamorro, como miembro independiente. Según los acuerdos constitucionales del nuevo frente unitario contrarrevolucionario, su directorio tendría el mando militar único y el control de todos los fondos destinados a "los contras."

En el mismo marco de amenazas y presiones sobre Nicaragua, el 15 de mayo concluyó en Honduras la segunda fase de las maniobras "Escudo Sólido 87," diseñadas con el objetivo de "simular la respuesta a una petición de una nación amiga para ayudar a repeler un ataque desde un país cercano." En ellas participaron no menos de 7 mil soldados norteamericanos y 13 buques de guerra, entre ellos los portaviones *USS Shepport* y *USS Saipan*. Aunque los oficiales norteamericanos a cargo de los ejercicios descartaron que éstos constituyeran una amenaza para Nicaragua, admitieron que expresaban "un

mensaje para que Nicaragua mantenga su ejército en casa."

Con todo, como en los meses anteriores, no faltaron por otro lado gestos favorables a la distensión regional, como la "Carta de Bogotá" que la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPPAL) suscribió al término de su reunión en la capital colombiana, manifestando su apoyo a la propuesta de Arias y a las gestiones de Contadora. Por su lado, a partir del 9 de mayo, el propio presidente Arias emprendió una gira por siete países europeos con el doble propósito de buscar apoyo económico para Costa Rica y recabar respaldo político para su propuesta de paz para Centroamérica.

El mes de junio se inauguró con el quinto paro al transporte a nivel nacional, decretado por el FMLN el último día de mayo, y con el informe de labores sobre el tercer año de gestión administrativa, rendido por el presidente Duarte ante la asamblea legislativa, cuya sesión plenaria fue trasladada ese 1 de junio a Sensuntepeque (Cabañas).

El discurso presidencial no contuvo ningún anuncio novedoso. A falta de frutos efectivos que presentar como resultado de su tercer año de gestión, Duarte se contentó con ofrecer 56 proyectos de ley, la mayor parte de ellos encaminados a una presunta reactivación de la actividad económica, y otros pocos —como las dos leyes de amnistía— a favorecer una supuesta moderación de la situación de violencia política prevaleciente en el país.

En lo relativo a la situación económica, el mandatario aseguró que, a año y medio de su implementación, el programa de estabilización y reactivación económica aplicado a partir de enero de 1986 había logrado ajustar "los desequilibrios externos e internos de nuestra economía, disminuyendo el déficit fiscal, la brecha del sector externo y sentando las bases para una distribución equitativa del ingreso." Por otro lado, Duarte reveló que aún seguía sufriendo presiones para una nueva devaluación del colón, ejercidas por "técnicos norteamericanos" que, "olvidando las realidades sociales y públicas que vivimos, nos están proponiendo soluciones que teóricamente podrían resolver problemas económicos, pero que agudizarían en el corto plazo las malas condiciones de vida del pueblo... debemos reconocer que los problemas que vive el país son en parte económicos, pero sobre todo son problemas políticos y de injusticia social."

Como era previsible, el paquete de leyes encaminadas al presunto incremento de la productividad y del empleo fue recibido con sumo escepticismo por la empresa privada. El 6 de junio, durante la asamblea anual de la ANEP, el presidente de la entidad, Víctor Steiner, reiteró una vez más que los empre-

sarios estaban cansados de los ofrecimientos gubernamentales y requerían acciones concretas que le dieran efectivamente a la iniciativa privada "la importancia que tiene dentro de la economía nacional." Para ello, según ANEP, la política económica del gobierno debía cumplir al menos cuatro condiciones: 1) respeto pleno a la constitución de la república en orden a asegurar un marco de seguridad jurídica a la inversión y evitar leyes sorpresivas inspiradas en una "ideología anti-empresarial;" 2) libre comercialización interna y externa del café; 3) reducción del déficit fiscal a través de un incremento de la actividad productiva y de la disminución de la burocracia y freno a la corrupción; 4) cese del intervencionismo estatal en la actividad económica, especialmente con la pretensión de imponer controles de precios y regular los márgenes de utilidades.

Para sorpresa de los empresarios, el Ministerio de Economía pronto dio muestras de que sus políticas no eran tan anti-empresariales como aquéllos suponían. El 22 de junio, el titular del ramo, Ing. Ricardo Perdomo, suscribió con CASEFAR un acuerdo en virtud del cual se estipulaba un período de gracia de 60 días, a partir del 21 de mayo, para que los establecimientos farmacéuticos realizaran sus existencias y pudieran luego acatar el Acuerdo 211. Tres días después, Perdomo dio a conocer las medidas diseñadas por el ministerio para enfrentar la crisis del transporte urbano de pasajeros. Las medidas, consistentes fundamentalmente en la creación de "rutas especiales" con una tarifa de 1.20 colones por pasajero; y en el establecimiento de tarifas diferenciadas según la longitud de las rutas, descansaban en último término en los bolsillos de los usuarios. Asimismo, junto al incremento de las tarifas de la energía eléctrica y a las declaraciones sobre la necesidad de eliminar los subsidios al IRA en lo relativo a la producción y consumo de granos básicos, las medidas concretaban algunas de las recomendaciones formuladas por FUSADES para paliar el déficit fiscal. En otras palabras, el gran capital ganaba otra batalla económica frente a las mayorías populares.

No por esas concesiones, sin embargo, decayó la animosidad empresarial contra la línea general de las políticas gubernamentales. La celebración del día de la industria nacional, el 12 de junio, y, sobre todo, del día del empresario, el 18, fueron ocasión especial para que el sector privado inundara los medios de comunicación con panegíricos exaltados sobre las presuntas bondades de los empresarios y, correlativamente, la mala fe de sus detractores. En el marco de ese discurso ideologizado, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Eduardo Funes Hartmann, reiteró una vez más el fracaso de las reformas estructurales iniciadas en 1980, al tiempo que contrastó la caótica situación económica sufrida actualmente por el país con los

idílicos tiempos anteriores a 1979. Entre otros datos, Funes Hartmann citó que para 1986 el ingreso *per cápita* equivalió al 71.3 por ciento del que se tenía en 1978; el valor real de la producción disminuyó en 19.6 por ciento respecto al de 1978; y la exportaciones a Centroamérica alcanzaron sólo 84.5 millones de colones, frente a los 266.6 millones alcanzados en 1978. El 18, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la Sociedad de Comerciantes e Industriales (SCIS) emitieron un comunicado conjunto en el cual acusaron una vez más al gobierno de adoptar "lineamientos de una economía socialista y un injerencismo que día a día invade más el campo de la actividad económica."

Mientras tanto, en el reverso de la crisis económica, el proceso de organización laboral, catapultado por las movilizaciones del mes de mayo, siguió un curso de creciente confrontación con el gobierno y la Fuerza Armada. El 2 de junio, el general Blandón, acompañado del Estado Mayor Conjunto, ofreció una conferencia de prensa sobre las maniobras desestabilizadoras del orden social impulsadas por el FMLN "tratando de llevar el caos a los empresarios de buses por medio de los paros y la destrucción de unidades; la presión a los trabajadores para evitar que éstos lleguen a los centros de trabajo; así como los ataques a poblaciones y daños a civiles por efectos de las minas." En dicho marco, el jefe del estado mayor subrayó que las manifestaciones organizadas por la UNTS y por la Universidad de El Salvador (UES) respondían a que "la guerrilla cree que la capital es muy importante para sus acciones porque todavía tienen el recuerdo de 1979, cuando se apoderaban de las calles." Como corolario práctico de dicho análisis, Blandón concluía que había en el país ciertos sectores que "están malinterpretando el proceso de democratización y se dedican a provocar a la Fuerza Armada para que ésta se desprestigie." En la misma línea, el coronel Reynaldo López Nuila declaró al día siguiente que "las manifestaciones callejeras han llegado al límite de lo tolerante, agrediendo en varias ocasiones a miembros de los cuerpos de seguridad, por lo cual la Fuerza Armada ha decidido actuar con toda drasticidad... Somos garantes de la libertad, pero no vamos a permitir que se siga abusando más de nuestra tolerancia, que ha llegado a su límite."

Lejos de sentirse intimidado por las advertencias castrenses, el movimiento popular reafirmó su voluntad de incrementar las movilizaciones. El 2 de junio, la Unidad Universitaria y la CST realizaron una marcha que culminó frente a la asamblea legislativa, en repudio del atentado de que fuera objeto el profesor Julio César Portillo el último día de mayo. Las circunstancias ambiguas en que Portillo fuera herido y posteriormente escondido por la UNTS favorecieron un intercambio de acusaciones entre ésta y la Fuerza Armada. El coronel López

Nuila aseguró el 3 que el dirigente laboral había sido atendido en una de las clínicas clandestinas que operaban en la universidad nacional, mientras que el director de la Policía de Hacienda, general Rinaldo Gólicher, expresó que la UNTS había escondido a Portillo para que no se le practicaran los peritajes correspondientes "con el objeto de determinar el calibre de la bala, tipo de arma que le disparó y distancia a que le dispararon." Por su parte, la Federación de Comités de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados Políticos (FECMAFAM) aseguró que el ataque al dirigente formaba parte de un "plan de eliminación física sistemáticamente empleado contra los dirigentes de las organizaciones populares," en el cual se inscribían también, entre otros muchos hechos, el asesinato del secretario de ANTA en San Miguel, Antonio de Jesús Hernández, cuyo cadáver apareció decapitado el 2 de mayo; el atentado dinamitero contra el Comité "Monseñor Oscar A. Romero," ocurrido el 28 de mayo; la incursión efectuada dos días más tarde, por efectivos del ejército, al local de los comités CODEFAM, COMAFAC y Comisión no gubernamental de Derechos Humanos (CDHES), etc.

Junto a la lucha reivindicativa desarrollada por ANTMAG, a partir del 1 de junio se abrió otro importante foco de conflictividad en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Ese día, el sindicato de la institución (STISSS) inició un paro indefinido de labores demandando la satisfacción de la plataforma reivindicativa presentada el 2 de mayo y que las autoridades del ISSS rechazaron. Entre otras demandas, la plataforma incluía un incremento salarial de 150 colones; reconstrucción del hospital central del ISSS, dañado por el terremoto; ampliación del régimen de salud al grupo familiar de los asegurados, etc. Como una medida de presión adicional, el STISSS organizó el 3 una marcha por San Salvador. Por su parte, el director del ISSS, Dr. Jorge Bustamante, solicitó al Juzgado Tercero de lo Laboral declarar ilegal la huelga, solicitud a la que el juez respondió favorablemente el 4, estableciendo un plazo de 4 días para que los huelguistas retornaran a sus labores.

Otros focos menores de conflictividad laboral persistieron en ANDES, cuya dirigencia organizó los días 3 y 4 un paro de labores en protesta por el ataque a Portillo. El 4, el Sindicato de Trabajadores del Instituto de Vivienda Urbana (SETIVU) inició un paro indefinido de labores para exigir un aumento salarial de 150 colones y otras reivindicaciones. El mismo día, la CST organizó una nueva marcha por San Salvador, esta vez desde la unidad "Primero de Mayo" del ISSS hasta el Ministerio de Trabajo, en protesta por la indiferencia gubernamental a las demandas de los trabajadores. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de ANDA (SETA) denunció amenazas de capturas contra sus dirigentes y reiteró

su exigencia de resolución al problema de los 237 trabajadores despedidos en 1985. El 5 de junio, unos 850 trabajadores del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU) realizaron un paro de labores demandando el cumplimiento del contrato colectivo por parte de la patronal; el mismo día, la Asociación de Trabajadores de CEL (ATCEL) amenazó con iniciar un paro de labores si las autoridades no daban una respuesta satisfactoria a la plataforma presentada hacía dos años y medio.

Las tensiones en el seguro social continuaron creciendo. El 11 de junio, el STISSS realizó una marcha hacia casa presidencial para exigir el inicio de las negociaciones de las cláusulas pendientes de solución en el contrato colectivo. Los sindicalistas volvieron a solicitar audiencia al presidente Duarte —una solicitud anterior de audiencia para el 10 de junio no había tenido respuesta. Duarte les remitió al mayor Munguía Payés, quien les manifestó que el mandatario desconocía la problemática del STISSS y ofreció a los sindicalistas transmitir sus inquietudes al presidente. El 18 de junio, trabajadores de 12 organizaciones de empleados públicos (ATCEL, ASTTEL, AGEMHA, ATRAMEC, SITINPEP, ANTMAG, ANDES, SETA, STISSS, SIGEBAN, STITGASC, SETIVU) marcharon nuevamente a casa presidencial demandando la solución a sus respectivas plataformas reivindicativas. Una vez más, Duarte declinó recibirlos, remitiéndoles a Munguía Payés para que éste recogiera las demandas.

El director del ISSS mantuvo una posición de enérgico rechazo a las reivindicaciones sindicales, aduciendo que los fines de la huelga eran "políticos" y no laborales. Asimismo, adujo que la petición de incrementos salariales significaría para el ISSS una erogación adicional de 7 millones de colones para 1987 y de 17 millones para 1988, cifras que el Instituto no estaba en capacidad de cubrir. El 22 de junio, Bustamante solicitó la intervención de la Fiscalía General y del Ministerio de Trabajo para despojar del fuero sindical a los directivos del STISSS y aplicar a todos los huelguistas las sanciones prescritas por la ley. En un gesto de flexibilización de su postura, el STISSS redujo su plataforma inicial de veinte demandas a solamente siete, las cuales presentó al Viceministro de Trabajo, Dr. Lázaro Tadeo Bernal. Este reiteró que si el sindicato no levantaba la huelga no habría negociaciones, pero se comprometió a gestionar ante las autoridades del seguro las demandas. El 26, la Policía Nacional tendió un cerco de seguridad en torno a las instalaciones del ISSS para mantener el "orden" y facilitar su tarea a los trabajadores que habían optado por laborar. El mes de junio finalizó sin que las tensiones en el seguro ofrecieran ningún signo de amainar.

A la sombra de esta creciente efervescencia

laboral, los partidos políticos empezaron a movilizar sus respectivas maquinarias de cara al nuevo proceso electoral. El suceso más publicitado en esta línea fue el anuncio del coronel Sigifredo Ochoa Pérez sobre su retiro de la escala activa del ejército para incorporarse a las filas de ARENA y "entrar de lleno en el próximo proceso electoral." El anuncio fue acompañado de acerbos críticas contra la gestión democristiana y el propio alto mando de la Fuerza Armada. Entre otras declaraciones, Ochoa calificó la gestión de Duarte de "dictadura totalitaria" que "está destruyendo la empresa privada" y aseguró que el gobierno "no goza de simpatía ni de credibilidad, cosa que nunca ha ocurrido en el país." Al mismo tiempo, reveló que él, como militar, era un estorbo para el gobierno y el alto mando por la independencia de criterio que siempre había demostrado en las reuniones de comandantes, lo cual había motivado su traslado al exterior: "creo sinceramente que mientras esté la democracia cristiana en el gobierno, yo no tendré espacio en el campo militar." A todo ello añadió, sin ambages, que "el alto mando está politizado y por eso surgen algunas decisiones que merecen ser criticadas. Hay algunos elementos militares que son negativos para la institución castrense... Me retiro de ella porque tiene elementos negativos a los cuales no voy a apadrinar." Al día siguiente de tales declaraciones, el presidente Duarte expresó que, en otras partes del mundo, un militar todavía de alta que hubiese formulado comentarios como los de Ochoa "ya hubiera sido arrestado, pero aquí no, porque le damos un espacio político a todos los sectores."

En la misma atmósfera de polémica interpartidista, el asesinato de Monseñor Romero surgió una vez más como caballo de batalla entre ARENA y el PDC. El antecedente inmediato de la revitalización de la discusión en torno al caso lo constituyó el nombramiento del nuevo Fiscal General de la República, Dr. Roberto Girón Flores, juramentado en dicho cargo el 2 de junio, en sustitución del Dr. José Francisco Guerrero (ARENA). Al asumir el cargo, el Dr. Girón Flores informó que la fiscalía haría especiales esfuerzos para esclarecer el asesinato del arzobispo. Dicho anuncio fue seguido de insistentes rumores sobre la localización de un testigo que rendiría declaraciones sobre el involucramiento del mayor D'Aubuisson en el magnicidio. A todo ello respondió ARENA, el 16 de junio, proponiendo la creación de una comisión con "amplias facultades" para investigar el asesinato de Monseñor Romero así como el de otras personalidades como el Dr. Mario Zamora y el Dr. Rafael Hasbún. En la misma conferencia de prensa, tanto el ex-fiscal general como el mayor D'Aubuisson aseguraron tener algunos datos que podían arrojar luces sobre el asesinato del arzobispo. A su vez el Dr. Girón Flores citó a declarar a Guerrero y a

D'Aubuisson. El ex-fiscal concurrió el 30 de junio a la fiscalía, para rendir en privado su declaración, aduciendo que no podía mencionar a la prensa los nombres de las personas que le habían brindado la información de que disponía, para no comprometerlas. El mayor D'Aubuisson, en cambio, rehusó acudir al citatorio, alegando el fuero de que goza como diputado.

Con todo, los intercambios sobre el asesinato del arzobispo fueron pronto sobrepasados por la feroz disputa interna por las precandidaturas en el PDC, entre la "argolla" dominada por el Ministro de Cultura, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, y los sectores "disidentes" que apoyan al Ministro de Planificación, Dr. Fidel Chávez Mena. La crisis democristiana trascendió a la luz pública en la sesión legislativa del 25 de junio, cuando 9 diputados fidelistas, encabezados por el jefe de la fracción democristiana, Atilio Viéytez, rehusaron conceder su voto a las mociones presentadas por "la argolla" hasta tanto la directiva nacional del PDC no reabriera el proceso de inscripción de nuevos afiliados. El sector disidente alegaba que, a la vista de las numerosas afiliaciones logradas por la línea de Chávez Mena, y el temor de perder el control de las estructuras del partido, "la argolla" había decidido arbitrariamente suspender las afiliaciones. El 29 de junio, al término de una violenta sesión de la directiva nacional del PDC para discutir la situación y determinar posibles sanciones para los diputados disidentes, el Lic. Atilio Viéytez presentó su renuncia como jefe de la fracción.

Un eje menor de confrontación partidista lo constituyó la disputa entre el PCN y el partido Social Demócrata (PSD) en torno a las prerrogativas que ambos se auto-atribuían para representar en el país el ideario de la social democracia. La disputa se hizo pública a raíz del anuncio, formulado el 9 de junio por el Dr. Rafael Morán Castaneda, sobre las intenciones del PCN de retomar la línea presuntamente socialdemócrata contenida en sus principios y sobre el próximo envío a Europa de una delegación del partido para establecer contactos con diversas fuerzas de la socialdemocracia internacional. El anuncio desató enconadas protestas del PSD, cuya dirigencia insinuó que el PCN había sido comprado por la embajada norteamericana, la cual estaba interesada en la creación de un partido laborista obrero y no había encontrado eco en el PSD para realizar tales propósitos.

Paradójicamente, en contraste con el incremento de la conflictividad laboral y la movilización de los partidos, la guerra disminuyó su intensidad respecto del curso seguido en los meses precedentes, no obstante el éxito alcanzado por el quinto paro al transporte decretado por el FMLN, el cual concluyó el 2 de junio. Radio Venceremos calificó el paro como

una "victoria estratégica" que habría dejado un saldo de por lo menos 20 vehículos destruidos o semidestruidos y alcanzado una efectividad del 95 por ciento en todo el país, incluida —por vez primera— la propia capital. El último día del paro, unidades guerrilleras atacaron la posición militar de Santa María Ostuma (La Paz), causando 2 bajas al ejército y destruyendo la comandancia local. Cuatro días después, otras unidades rebeldes penetraron a la localidad de Ozatlán (Usulután), librando recios combates con las tropas gubernamentales. Tras estas acciones de mediana envergadura, la actividad guerrillera redujo sensiblemente su intensidad a lo largo del mes, limitándose a acciones esporádicas de desgaste, sabotaje y medianas emboscadas contra tropas gubernamentales.

Por su lado, la Fuerza Armada reforzó la operación "Teniente Fernando Martínez Lemus," mientras que tropas de la Quinta Brigada de Infantería, apoyadas por otras unidades, desplegaron desde los primeros días de junio un amplio operativo de contrainsurgencia en el área del volcán Chinchontepic (San Vicente). Posteriormente, el ejército desplegó otro operativo contrainsurgente desde el sector de El Playón, en Tecolouca (San Vicente), hasta la zona costera del departamento de La Paz, después de que el FMLN emboscó en El Playón, el día 8, a una patrulla militar del batallón Cañas, con saldo de un teniente y un soldado muerto y 10 efectivos heridos. Días más tarde, el 19 de junio, tropas combinadas de la Tercera Brigada, Batallón Arce y Destacamento Militar N° 3 intensificaron un fuerte operativo en la zona de Nuevo Edén de San Juan, en el norte de San Miguel, contra columnas guerrilleras presuntamente dirigidas por el comandante Joaquín Villalobos.

No obstante el relativo decremento de la actividad militar, el 29 de junio partió a Estados Unidos una delegación del Estado Mayor Conjunto, encabezada por el general Adolfo Blandón, con el propósito de explicar a las autoridades del Pentágono y del departamento de Estado la necesidad de aumentar la asistencia militar al ejército salvadoreño y, específicamente, la necesidad de reforzar la fuerza aérea con aparatos más modernos.

La propuesta de diálogo difundida por el FMLN-FDR el 28 de mayo siguió esperando una respuesta favorable de Duarte, quien en su discurso del 1 de junio en Sensuntepeque se limitó a expresar su satisfacción por la iniciativa, pero sin formular ninguna contrapropuesta seria. Aparentemente, la propuesta revolucionaria estaba siendo estudiada por una comisión gubernamental, y el propio general Blandón declaró el 6 de junio, en Panamá, que el presidente Duarte haría bien en articular una respuesta a la guerrilla, respuesta que la Fuerza Armada estaba dispuesta a apoyar si ella contribuía a

instaurar la paz, la justicia y un verdadero estado de derecho en El Salvador.

Sin embargo, aunque el diálogo siguió estancado, los pasos dados en la humanización del conflicto recibieron un nuevo impulso el 28 de junio, día en que, a bordo de un avión de LACSA fletado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), un nuevo contingente de 98 guerrilleros lisiados partió hacia México y de ahí a La Habana y diversos países europeos para recibir atención médica especializada. Al comentar la evacuación, monseñor Rivera indicó que ello podía ir allanando el camino para un eventual retorno del gobierno y del FMLN-FDR a la mesa de conversaciones, al mismo tiempo subrayó que la salida de tantos lisiados constituía un argumento contundente a favor de la finalización de la guerra "porque tener tanta gente lisiada es innecesario: hay en el ejército nacional unos 1,200 y en la guerrilla creo que van más de 500."

En el panorama regional, la nota más relevante fue la postergación de la cumbre de mandatarios centroamericanos, programada para realizarse los días 25 y 26 de junio en Guatemala. El aplazamiento de la reunión fue solicitado el 12 de junio por el presidente Duarte, cuando ya todos los detalles del encuentro estaban virtualmente ultimados. Como justificación de la solicitud, Duarte adujo que por esas fechas tenía programado un viaje a Europa —el viaje en cuestión no se realizó—, y adujo asimismo que la cumbre no estaba suficientemente preparada. Tales excusas hallaron escasa credibilidad, tomando en cuenta que apenas 3 días antes de formular su solicitud para aplazar la reunión, Duarte se había entrevistado con el embajador itinerante del gobierno de Reagan para Centroamérica, Phillip Habib, quien le habría comunicado que la Casa Blanca deseaba que la cumbre de mandatarios no se efectuara antes de septiembre, cuando el congreso norteamericano discutiría la aprobación de nuevos fondos a "los contras." Días más tarde, el 16 de junio, arribó a San Salvador, procedente de Tegucigalpa, una delegación del gobierno de Reagan, integrada por el subsecretario de Estado para asuntos interamericanos, Elliott Abrams, y el subsecretario de defensa, Frederick Ikle, quienes almorzaron con Duarte y se entrevistaron luego con el alto mando castrense.

En un esfuerzo por salvar la cumbre, el presidente Arias viajó a Washington, donde se entrevistó el 17 de junio con el propio Reagan, así como con el vicepresidente Bush y otros altos funcionarios gubernamentales vinculados a la cuestión centroamericana: Abrams, Carlucci, Habib, etc. Las gestiones de Arias, empero, fueron infructuosas, como él mismo lo reconoció el 18, antes de retornar a

Costa Rica: "he fracasado en mi intento de persuadir a la administración Reagan para que tome el riesgo de la paz. Yo hubiera preferido tomar el riesgo por la paz, ya que muchas veces se ha tomado el riesgo por la guerra, y haberle dado a Nicaragua la

oportunidad de lograr la paz sin contras... He tratado por todos los medios de persuadir a los miembros de la administración Reagan de que ésta es la mejor salida, pero no he tenido éxito."

